

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA

Bogotá D.C, 14 de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Medida de Protección No. 617-2018

Rad. 2018-0494

Las diligencias de la referencia fueron remitidas por la Comisaría Cuarta de Familia San Cristóbal I de esta ciudad, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 652 de 2001 que remite al Decreto 2591 de 1991.

ANTECEDENTES

Dentro de la petición de protección por violencia intrafamiliar instaurada por GINA ALEJANDRA DIAZ CONTRERAS contra JUAN PABLO GUZMAN SALAZAR, la Comisaría Cuarta de Familia San Cristóbal I de esta ciudad, en diligencia celebrada el día cinco (5) de julio dos mil diecisiete (2017), adoptó medidas de protección al tenor de lo normado en la ley 294 de 1.996.

Posteriormente la Comisaria de conocimiento admite un primer incumplimiento a favor de la señora GINA ALEJANDRA DIAZ CONTRERAS contra JUAN PABLO GUZMAN SALAZAR y mediante providencia le fue impuesta como sanción al ser declarados probados los hechos violentos con multa de tres salarios mínimos legales mensuales, providencia que fue debidamente consultada y confirmada por este despacho judicial.

Nuevamente el 3 de septiembre de 2021, la señora GINA ALEJANDRA DIAZ CONTRERAS solicitó se tramite un segundo incumplimiento a las medidas de protección contra JUAN PABLO GUZMAN SALAZAR, el cual fue admitido por la Comisaria a quo, quien luego del trámite correspondiente por

auto del 30 de septiembre de 2021 sancionó al accionado con arresto de 30 días.

CONSIDERACIONES

Como se puede observar, el proceso se tramitó bajo los parámetros establecidos en la Ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000, sin que se aprecie por parte del Juzgado causal de nulidad que invalide lo actuado.

El presente trámite tiene por objeto verificar si el denunciado JUAN PABLO GUZMAN SALAZAR ha cumplido con las órdenes impartidas por la Comisaria o si por el contrario se ha hecho merecedor de las sanciones impuestas en providencia que se consulta por haber incurrido en desacato.

El análisis de los hechos expuestos en la solicitud con las pruebas recaudadas, debe crear la convicción de quien se predica ha incumplido, medida de protección para finalizar con las decisiones tomadas en la providencia que se consulta.

Descendiendo al caso tenemos que la denunciante sostiene ha sido maltratada físicamente por parte del señor JUAN PABLO GUZMAN SALAZAR.

Debe decirse que el accionado debidamente notificado para que ejerciera su derecho de defensa se hizo presente, quien aceptó los hechos.

La violencia intra-familiar en la Ley 294 de 1996 fue definida como todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de estos incluyendo hijos adoptivos y en general todas las

personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad familiar.

Como principales manifestaciones de la violencia psicológica, según diversos autores podemos clasificar diferentes conductas de violencia psicológica habituales en las situaciones de malos tratos:

Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e ironías para confundir, poner en tela de juicio la cordura de la víctima.

Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas o castigos monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la familia, haciéndole pedir dinero, solicitando justificación de los gastos, dándole un presupuesto límite, haciendo la compra para que ella no controle el presupuesto, etc.

Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento de cultivar amistades, restringir las relaciones con familiares, etc.

Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o destrozar la propiedad. Mostrar armas. Cambios bruscos y desconcertantes de ánimo. El agresor se irrita con facilidad por cosas nimias, manteniendo a la víctima en un estado de alerta constante.

Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños, hacer daño a los animales domésticos, amenazar con irse o echar al otro de casa.

Desprecio y abuso emocional: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes sin consultarle, utilización de los hijos, prácticas de

privilegios masculinos. Se la denigra intelectualmente, como madre, como mujer y como persona. Negación, minimización y culpabilización.

Del material probatorio adosado al expediente que, al ser confrontadas con los hechos relacionados por la accionante, tienen coherencia con lo relatado, circunstancia que fue atendida por la Comisaria A quo para declarar el incumplimiento de la medida de protección, coligiéndose que efectivamente el accionado participó en agravios de carácter físico; acción con la cual resulta proclive el accionado a dichas aptitudes y por ello, se le impusieron las medidas de protección.

Con los hechos denunciados por la accionante, puede evidenciar el despacho el grado de afectación que padece, junto con las pruebas adosadas al expediente, se pueden determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron, es por ello que el despacho evalúa y analiza la congruencia emocional que padece la víctima, con lo relatado, determinando claramente la situación de intranquilidad y perturbación de la accionante, sumado a los antecedentes que han venido sucediendo con anterioridad y por los cuales fue necesario imponer medida de protección en su favor, como se dijo en precedencia.

Así las cosas, la decisión proferida por la Comisaria de Conocimiento se encuentra ajustada a derecho.

Frente a la sanción de arresto que le fuera impuesta, el art. 7° de la ley 294 de 1996 establece: *“El incumplimiento de las medidas de protección dará lugar a las siguientes sanciones:*

Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) días siguientes a su imposición.

Si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de dos (2) años, la sanción será de arresto entre (30) y cuarenta y cinco (45) días (...). Subrayado y Sombreado fuera del texto.

Con base en lo expuesto el Juzgado confirma en todas sus partes la resolución emitida por la Comisaría Cuarta de Familia San Cristóbal I esta ciudad.

Por lo anterior este despacho judicial dispone librar la correspondiente orden de arresto contra el señor JUAN PABLO GUZMAN SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.010.177.197, sanción que deberá cumplirse en la Cárcel Distrital, de esta ciudad, previa conducción por las autoridades de policía correspondiente, para lo cual se librá la respectiva boleta de encarcelación y excarcelación, indicándose que el término del arresto comenzará a contar a partir de la primera hora y minuto de la captura, que vencido dicho término, deberá dejarlo en libertad sin necesidad de nuevo oficio, comunicando al juzgado lo último.

Sobre el pronunciamiento oficioso que debe hacer el despacho, en cuanto a la PERSPECTIVA DE GENERO, debemos remitirnos en primer lugar a Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

En efecto, en dicha ley se identificaron los principios que toda autoridad pública debe seguir al momento de evaluar un caso de violencia intrafamiliar, de los cuales se destacan, a) la primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; b) que toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las

autoridades públicas; c) **la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer**; entre otros.

Asimismo, dicha normativa estableció varias medidas de protección, el procedimiento a seguir cuando ocurren actos de violencia y las formas de asistencia a víctimas del maltrato intrafamiliar.

La actora inició una acción de protección por violencia intrafamiliar en contra de su compañero por los actos de violencia física cometidos en su contra.

La violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica de la mano con la perspectiva de género, así como la naturaleza y alcance del interés superior de los niños.

La Ley 1098/2006 expresa que *“se entiende por **perspectiva de género** el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.*

Así las cosas, la perspectiva de género consiste en la necesidad de reconocer, cuando ello sea relevante, la asimetría que puede existir entre un hombre y una mujer, debido a una relación de poder. Ello se traduce en la obligación del Estado de diseñar e implementar políticas públicas que incluyan acciones afirmativas para superar la discriminación. Tal concepto encuentra apoyo en los artículos 13, 42, 43, entre otros, de la Carta Política y en los instrumentos internacionales.

En este estado de cosas, la administración de justicia tiene el deber de cumplir sus funciones a la luz de la perspectiva de género, en aquellos casos que se denuncie violencia sexual o intrafamiliar. A partir de lo anterior, existe entonces un deber constitucional bajo su cargo cuando se enfrenten con

situaciones fácticas de estas características. Por esa razón, entonces, es obligatorio que incorporen criterios de género al solucionar sus casos. En consecuencia, cuando menos, deben analizar los hechos y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que se reconozca que un grupo tradicionalmente discriminado por virtud de las relaciones de poder, afectan su dignidad y autonomía.

En el caso objeto de estudio, se tiene que el querellante corresponde a la señora GINA ALEJANDRA DIAZ CONTRERAS, frente a los agravios de carácter físico del que ha sido víctima, que corresponde a violencia intrafamiliar contemplada en las leyes tantas veces mencionadas.

A instancias gubernamentales y jurídicas, en cuanto a la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer, de conformidad con las instancias gubernamentales y jurídicas, como la equidad en el empleo, trabajo, salario, sin dejar a un lado, lo dispuesto en los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW.

De igual manera, no puede pasar por alto el Despacho, que las circunstancias que rodean el presente asunto, por razones relacionadas con la perspectiva de género o cualquier otra circunstancia, pues precisamente el artículo 4 de la Ley 294 de 1996 (modificado por el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008) ha señalado que toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, pueda pedir al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.

Así las cosas, la decisión proferida por la Comisaria de Conocimiento se encuentra ajustada a derecho.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la providencia de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) proferida por la Comisaría Cuarta de Familia San Cristóbal I de esta ciudad en la solicitud de incumplimiento a Medida de Protección promovida por GINA ALEJANDRA DIAZ CONTRERAS contra JUAN PABLO GUZMAN SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.010.177.197.

SEGUNDO: Expedir la orden de arresto de treinta (30) días, que le fue impuesta al señor JUAN PABLO GUZMAN SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.010.177.197, por incumplimiento a la conminación de no agresión que le ordenó la Comisaria Cuarta de Familia San Cristóbal I de esta ciudad, dentro de la medida de protección No. 617-2017.

TERCERO: COMUNICAR a la POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, para que proceda a la aprehensión y arresto del señor JUAN PABLO GUZMAN SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.010.177.197, informando que la medida de arresto a la que se hizo acreedor se cumplirá en la cárcel Distrital de esta ciudad, previa conducción por parte de dicha autoridad, para lo cual se librá la boleta de encarcelación y excarcelación, indicándose que el término del arresto comenzará a contar a partir de la primera hora y minuto de la captura, que vencido dicho término deberá dejarla en libertad sin necesidad de nuevo oficio, comunicando al Juzgado lo último. OFÍCIESE.

CUARTO: LÍBRESE boleta de encarcelación y excarcelación a la autoridad de Policía, con las observaciones indicadas en la parte motiva de esta providencia, a efectos de que tenga lugar la conducción y el cumplimiento de la medida impuesta. OFÍCIESE.

QUINTO: ORDENAR a la Comisaria Cuarta de Familia San Cristóbal I de esta ciudad, notificar esta decisión a las partes conforme lo establece la ley.

SEXTO: DEVOLVER las diligencias a la Comisaría de origen, una vez se encuentre ejecutoriada la presente providencia y libradas las comunicaciones respectivas. OFÍCIESE.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA, BOGOTÁ D.C.

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

SECRETARÍA

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2021

El auto anterior queda notificado a las partes por anotación en el ESTADO N°. 150

MARIA ELSY RIVERA USECHE

Secretario